

ANDALUCÍA

> EMERGENCIA ECONÓMICA

Las protestas por los recortes



El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, lee el comunicado, ayer, en las escaleras del Paraninfo, rodeado de docentes. / EFE

López acelera la extra tras anunciar el TC que decidirá ya

Ó. TORRES / Vitoria

El Tribunal Constitucional adoptará una primera decisión sobre la paga extra de los empleados públicos vascos esta misma semana. Lo hará en la sesión plenaria que ya estaba programada con anterioridad y que tendrá lugar entre hoy martes y el próximo jueves. No obstante, puede ser que la resolución sobre las medidas cautelares que ha solicitado el Gobierno de Mariano Rajoy llegue tarde.

La inclusión de este asunto en el orden del día de los trabajos del Alto Tribunal se conoció ayer y no se sabe todavía si alcanzará a evitar el desembolso de los 207 millones de euros de la extra navideña, porque el Gobierno vasco también trabaja contrarreloj y confirmó, casi al mismo tiempo, que había dado las últimas órdenes para que se ejecutara el pago.

Mientras el Ejecutivo de Patxi López trata de cerrar al menos el primer asalto del debate sobre la extra que esperan 67.000 funcionarios vascos, el Tribunal Constitucional deberá decidir si admite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central y adopta, como es previsible en tal caso, medidas cautelares para que estas cantidades no lleguen a abonarse.

La resolución sobre el fondo de la cuestión, sobre si prevalece el Real Decreto que deja sin paga a todos los funcionarios del Estado o lo hace la Ley de Presupuestos del País Vasco, llegará después.

Si el asunto sigue adelante sin que el Gobierno vasco haya cerrado el pago, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, recordó ayer que ante un conflicto de competencias es la ley autonómica de Presupuestos la que quedaría suspendida. Los funcionarios no llegarían a cobrar.

Los rectores alertan de que España se puede quedar «sin conocimiento»

Piden «financiación pública suficiente» y poder «diversificar sus fuentes de ingresos»

R. B. / Madrid

En la retahíla de instituciones y sectores que están alertando sobre las graves consecuencias del recorte del gasto público, ayer le tocó el turno a las universidades, que todas a una hicieron público un comunicado en el que directamente advirtieron de que España está en vías de quedarse «sin conocimiento». A mediodía, los rectores de 49 universidades públicas –todas, salvo la Universidad del País Vasco– leyeron públicamente un texto que, más que una crítica a la política de ajustes presupuestarios del Gobierno, es una advertencia sobre las consecuencias del desplome de la inversión en educación superior.

Los rectores destacan que los recortes previstos en 2013 para la universidad son de un 18%, porcentaje que se incrementa hasta el 80% para el área de I+D+i. Estas cifras, unidas a «la congelación de las plantillas»,

llevará a España a «la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento», dicen en el comunicado.

Más allá, señalan que «los efectos del endeudamiento de las comunidades autónomas están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable». Los rectores concluyen que la consecuencia de esta falta de financiación es que «será inviable el funcionamiento de las universidades públicas», y proclaman que, «sin conocimiento, no habrá progreso». Algo que, recuerdan, perjudica a la sociedad, porque precisamente «el conocimiento» es «una de las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica», como el propio «discurso político» se encarga de afirmar repetidamente.

La reivindicación que hacen los responsables de la educación superior es «una financiación pública suficiente», pero no sólo. Conscientes de la delicada situación económica que atraviesa España, también reclaman que «se fortalezca la autonomía universitaria» para que los centros «puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos».

Manifiesto inédito

La inédita lectura de un manifiesto de este tipo tuvo un amplio seguimiento en las 49 universidades públicas. Sólo faltó a la convocatoria el rector de la del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, que, según explicó él mismo, comparte la mayor parte del texto, pero no la que se refiere a la falta de compromiso por parte de las comunidades autónomas, ya que en su caso particular no es así.

Aparte del manifiesto conjunto,

que pese a todo está redactado de forma comedida, algunos rectores hicieron declaraciones más subidas de tono. Fue el caso del de la Complutense de Madrid, José Carrillo, que aseguró que en el Gobierno hay «ciertas intenciones de privatizar» la universidad y denunció la «oscura» comisión de expertos que está revisando el modelo universitario.

Desde Andalucía, el consejero de Economía, Antonio Ávila, mostró su «apoyo» a los rectores asegurando que el manifiesto «debe hacer reflexionar al ministro Wert», informa Europa Press. Obviando la deuda que la propia Junta mantiene con las universidades, el consejero dijo que «comprende sin ningún tipo de dificultad la posición de los rectores». «Cuando todos están en una dirección que no es en la que tú estás, normalmente el que está equivocado es uno», afirmó Antonio Ávila.

El 'Síndic' pide vetar las bolas de goma

Propone alternativas como el cañón de agua, inviable económicamente según Interior

JAVIER OMS / Barcelona

El Síndic de Greuges –Defensor del Pueblo catalán– se ha sumado al debate sobre las bolas de goma a las que recurren los Mossos d'Esquadra reclamando que se veten «inmediatamente» hasta que el Parlamento catalán tome una decisión sobre su uso.

La propuesta de Rafael Ribó llega en plena tormenta política y policial por la querrela presentada por Esther Quintana quien, supuestamente, perdió el ojo izquierdo tras

recibir el impacto de un proyectil policial en el centro de Barcelona durante la huelga general del 14 de noviembre. De confirmarse este extremo –los Mossos, que lo niegan rotundamente, han abierto una segunda investigación interna tras ser desmentida por un vídeo la versión oficial ofrecida por Felip Puig–, sería la octava persona en sufrir daños oculares por las mencionadas bolas en los últimos años.

Ribó, quien ayer eludió referirse al caso de Quintana en concreto,

presentó un informe de oficio y ya remitido al Govern en el que, entre otras recomendaciones, también insta a los Mossos a estudiar el uso de armas antidisturbios alternativas como los cañones de agua que utiliza la *bundespolizei* en Alemania. Sin embargo, dicha propuesta no sólo es de imposible aplicación a corto plazo con un Govern en funciones, sino que ya fue descartada hace meses por los responsables de Interior al considerarla inviable, tanto económica como operativa-

mente. Según fuentes conocedoras de aquella decisión, los Mossos llegaron a viajar a Alemania tras el polémico desalojo de los indignados de plaza Catalunya en 2011 para informarse de primera mano sobre su funcionamiento, el rendimiento en incidentes y el coste. No obstante, las lesiones que causa, su elevado precio –cercano al millón de euros–, y las dificultades operativas que entraña –son útiles en grandes avenidas, pero ineficaces en pasadizos estrechos como los

del Born o el Raval, donde se concentran muchos de los incidentes en Barcelona– hicieron que se descartara.

El veto a las bolas de goma que reclama Ribó, en todo caso, es sólo uno más en una larga lista de colectivos que rechazan el uso de las polémicas bolas. CCOO consideró ayer que su uso es contrario y «pone en riesgo a las personas que ejercen su derecho a manifestación». Su supervivencia como último recurso de los antidisturbios está, en todo caso, en la arena política y, en especial, en el tejado de ERC, abiertamente contrario a su uso y que tiene en su mano la investidura de Artur Mas como presidente.